

EL DESASTRE DEL 98 Y MILITARISMO

GABRIEL CARDONA

En la resaca de la derrota militar y naval, las Cortes aprobaron, el 5 de septiembre la cesión de todas las posesiones ultramarinas. Dos días después, el conde de las Almenas intervino en el Senado culpando al Ejército de la derrota. El conde era un antiguo amigo de Alfonso XII y escandalizó a sus compañeros del Partido Conservador al afirmar su simpatía por los soldados derrotados pero no por sus jefes, que no habían sabido conducirlos a la victoria.

El debate se hizo dramático cuando el conde amenazó con *arrancar de los pechos muchas cruces y subir muchos fajines desde la cintura al cuello*. Los generales Primo de Rivera, Azcárraga y Weyler, que también eran senadores, se le enfrentaron y, fuera del Senado, otros generales le manifestaron su repulsa.

Weyler, en su segunda intervención, pidió que se depurasen las responsabilidades pero advirtió que, si no se defendía al Ejército, *los generales se tomarían la justicia por su mano*. El escándalo fue mayúsculo y, cuando Sagasta pidió pruebas al conde de las Almenas, éste respondió que todavía no las tenía aunque Primo de Rivera, Weyler, Blanco y Cervera no habían sabido llevar sus tropas a la victoria.

La derrota colonial devolvió el poder a los conservadores, ahora liderados por Silvela, que debió renunciar a la postura tradicional de su partido e iniciar una política de austeridad, reducción de gastos militares cuando las potencias extranjeras se lanzaban de lleno al imperialismo y la carrera de armamentos.

La Marina de Guerra había perdido sus barcos y el Ejército estaba desbaratado por la derrota. La repatriación devolvió a la Península una multitud de militares profesionales que el Estado no necesitaba, mientras se perdía gran cantidad de armamento y material, que la Hacienda no podía reponer. El Ejército quedó compuesto por unos 500 generales, 23.000 jefes y oficiales, y 80.000 sargentos, cabos y soldados, de manera que el exceso de oficiales y la pobreza estatal lo desprofesionalizaron y ser militar en España se convirtió más en una actitud ante la vida que en una actividad. Porque la vida militar se reducía a rutinarios servicios y desfiles; y los oficiales se vieron obligados a consumirse en la administración de un ejército inútil para la guerra internacional, dedicado a instruir someramente a los soldados analfabetos, restablecer el orden y juzgar a los revoltosos.

En 1900 el presupuesto del Ejército sumaba 138 millones. Los sueldos consumían 80, los gastos de la tropa 45 y sólo quedaba 13 para adquirir y cuidar el armamento, el equipo y hacer

ejercicios. España tenía 471 generales, 142 almirantes, sólo dos grandes buques de guerra y los regimientos apenas tenían soldados para montar la guardia y mantener los servicios internos de una unidad que no existía. Las angustias económicas continuaron durante los diez años siguientes y el contingente de soldados en filas se redujo a 30.000 reclutas anuales, con una relación teórica de 1,2 soldados por cada jefe u oficial. Disminuía por la costumbre de que cada uno de ellos retenía un soldado como asistente. Por lo cual, cualquier unidad podía contar con menos tropa efectiva que mandos.

Ni la clase política ni el Ejército, podían vanagloriarse de aciertos en la guerra. Todos tenían responsabilidades que ocultar y a nadie interesaba debatirlas a fondo. Ni siquiera se formó una comisión parlamentaria para investigar el Desastre.

No sucedió lo mismo en la sociedad civil, que vivía la tragedia de los muertos y el dramático espectáculo de los repatriados heridos, mutilados, enfermos o destrozados moralmente. Las secuelas de la guerra, las pérdidas económicas y los recuerdos de la campaña antiquintas, estimularon el antimilitarismo que creció en unos ambientes, mientras en otros se exaltaba a los generales más distinguidos, sobre todo a Weyler y Polavieja, que se habían distinguido por su dureza durante la guerra y se hicieron enormemente populares.

Pareció revivir la convicción decimonónica de buscar la salvación del país en el general. En la oleada regeneracionista, comenzó a reclamarse una mano de hierro que enderezara España y Polavieja creyó que podía ser la suya. El liberal Canalejas y Cascajares, el arzobispo de Valladolid, habían concertado un acuerdo secreto y buscaban un general que les sirviera de mascarón de proa. Descartado Weyler, por su conocido rechazo a la política, tentaron a Polavieja que era muy bien visto en la Corte y aceptó encantado. El 1 de septiembre de 1898, lanzó un manifiesto regeneracionista que propugnaba la descentralización administrativa, la lucha contra el caciquismo y la reorganización del Ejército. Intentó reagrupar a los conservadores y recibió el apoyo de la burguesía catalana.

El entendimiento entre el general y los conservadores catalanes acabó despertando los recelos de Canalejas que dieron al traste con el proyecto. Entonces, Polavieja fue captado por los conservadores de Silvela quién, cuando formó gobierno en marzo de 1899, lo nombró ministro de la Guerra. Sin embargo, Polavieja dimitió el 28 de septiembre por desacuerdo con el presupuesto de Fernández Villaverde, que impedía sus planes para reformar el Ejército.

Canalejas, tras romper con Polavieja, se aproximó a Weyler, intentando recuperarlo para el Partido Liberal. Por entonces, el general había sucumbido a la tentación regeneracionista, ofrecida por sus paisanos mallorquines quienes, a finales de 1898, fundaron en Palma un *Círculo Weylerista*, que contaba con socios conservadores, republicanos y católicos. Sus estatutos señalaban que tenía por objeto rendir homenaje al general, seguir sus aspiraciones y secundarle políticamente. En el *Círculo*, Weyler manifestó su repulsa a los políticos que achacaban el desastre a las fuerzas armadas y dijo pretender: *la regeneración de la patria y que en ella encuentren estas masas el trabajo que hoy les falta*. Se declaró partidario de una dictadura militar para reorganizar el Ejército y la Marina y si se producían motines que un gobierno estable no pudiera controlar. En diciembre, el *Círculo* promovió una suscripción popular para regalarle una espada, con listas abiertas en varios periódicos, alguno de ellos republicano.

El weylerismo mallorquín pervivió hasta 1901, cuando, de acuerdo con su líder, se incorporó al Partido Liberal.

El Desastre aguzó el enfrentamiento entre el Ejército, la prensa y los políticos que condujo al pretorianismo del siglo XX.

En los círculos militares se acusaba a los políticos y a los periodistas, tachándoles de cobardía y falta de patriotismo. Las críticas se generalizaron y encresparon por el testimonio de los soldados derrotados, que comenzaron a regresar, desvelando las penalidades que habían padecido, los innumerables muertos por enfermedad, la pésima asistencia médica y las lamentables condiciones en que se había luchado. Proliferaron los relatos, verdaderos y falsos, de corrupción, traición e incompetencia profesional achacados a los militares de Ultramar. Periodistas y políticos aprovecharon la oportunidad para devolver sus andanadas a los militares.

La fractura entre unos y otros se mantendría durante muchos años, con dramáticas consecuencias para la historia de España. Desde el Desastre, los círculos militares se sintieron más separados que nunca de los *paisanos* y acusaron al conjunto de los políticos y los periodistas de ocasionar todas las desgracias de la patria. Paralelamente, influyentes sectores de la opinión civil satanizaban al Ejército, achacándole el origen de todos los males. Tras el Desastre, prosperaba el maniqueísmo. Como un síntoma, en mayo de 1899, chocaron violentamente en las calles de Valladolid, los estudiantes y los cadetes de Caballería.

En junio, Weyler reconoció en el Senado que le habían ofrecido encabezar un pronunciamiento pero que su tradicional disciplina le impedía escuchar semejantes proposiciones. No era hombre para participar en un movimiento armado pero advertía al gobierno conservador que, si no tomaba buena nota del malestar social y militar, pudiera producirse alguno destinado a regenerar la vida española, como antes lo hicieron Prim, O'Donnell, Serrano o Martínez Campos.

Dato, entonces ministro de la Gobernación, le respondió iracundo, que un fracasado de la guerra de Cuba no era quién para amenazar al gobierno y este enfrentamiento inició la mala relación que, desde entonces, mantuvieron ambos.

La polémica sobre las responsabilidades se zanjó en el otoño de 1899, cuando los tribunales de honor del Ejército, dictaminaron que sólo eran culpables dos generales y un almirante, que fuesen retirados prematuramente. Era evidente que las responsabilidades alcanzaban a muchos otros, sin embargo, el sistema de la Restauración no deseaba problemas y respetaba la autonomía militar, que había establecido Cánovas para apartar a los generales de la política.

En octubre de 1900, el gobierno conservador de Silvela nombró ministro de la Guerra el general Linares. Antiguo republicano, exigió de Silvela amplia autonomía para designar a los mandos militares y, haciendo uso de la misma, el 19 nombró capitán general de Madrid a Weyler, que había sido su superior en Cuba. Dato, ministro de la Gobernación, puso el grito en el cielo, argumentando que la importancia del nombramiento, obligaba a consensuarlo en el consejo de ministros. Linares no cedió, Weyler se aferró al cargo, Dato presentó su dimisión, a la que se añadió la del ministro de Fomento, y Silvela se vio obligado a presentar la de todo el gabinete.

Sagasta volvió al poder en marzo de 1901. Los liberales parecían recuperados del desgaste que les produjo la pérdida de las colonias. Habían renegado de la política de Weyler en Cuba, cesándolo a los dos días de formar su gobierno de 1897. Sorprendentemente, cuando, por pri-

mera vez volvieron al poder nombraron a Weyler, ministro de la Guerra. Durante los meses anteriores habían limado antiguas asperezas y el general volvía a sus antiguas simpatías políticas, aunque sin sentirse propiamente un político sino un general que, en los foros públicos, defendía las cuestiones militares. Su nombramiento suponía rehabilitarlo en toda regla mientras Sagasta se aseguraba el de los militares y de los numerosos simpatizantes del general.

En su nuevo cargo intentó la imposible tarea de administrar un Ejército desmoralizado, desprovisto de material, con un enorme sobrante de oficiales y con un escaso presupuesto. Apenas se podía hacer otra cosa que retocar la delicada institución y restañar cuantas heridas pudiera. Mientras las grandes potencias desarrollaban sus ejércitos tecnificados y se expandían en el mundo colonial, España había perdido sus colonias y mantenía un Ejército sin soldados y una Marina sin barcos.

El mayor problema del Ejército era la hipertrofia de sus escalafones de mando. El regreso del ejército de Ultramar había inundado los cuarteles y dependencias militares, con mandos sin nadie a quién mandar y cuyos miserables sueldos consumían el escaso presupuesto. Weyler procuró liquidar las consecuencias de la pasada guerra en la estructura militar. En primer lugar, reduciendo el número de oficiales. Cortó los ingresos en las Academias militares y, el 17 octubre de 1901, envió a las Cortes un proyecto que ofreció unas buenas condiciones de masivo retiro voluntario. La ley de 1901 concedió a quienes se retiraran voluntariamente, un ascenso y la pensión máxima de jubilación. Afectó a los oficiales de academia y a los de Reserva Retribuida, antiguos sargentos ascendidos para acudir a la guerra colonial. Se concedió un plazo de seis meses para la solicitud y fue el antecedente de las célebres reformas de Azaña en 1931.

El 17 de mayo de 1902 Alfonso XIII fue proclamado mayor de edad y asumió el poder. Era un muchacho de 16 años, caprichoso, entrometido y autoritario. Participó en el sentimiento de dignidad humillada del Ejército y fue incapaz de desempeñar hábilmente la figura del rey-soldado creada por Cánovas. Su inexperiencia política y afición militar, desvirtuaron el artificio, porque tomó tan en serio el papel de rey militar que se implicó directamente en el mando del Ejército, acostumbró a proponer directamente los nombres de los ministros de la Guerra y algunos altos mandos, y primó el poder político de las fuerzas armadas.

Cánovas había introducido en España, la figura del rey, como cabeza del cuerpo de oficiales. Alfonso XII sirvió de tapón a los levantiscos generales, a quienes, en compensación, tuvieron las manos libres para hacer y deshacer en el seno del Ejército. Alfonso XIII, privado de un mentor como Cánovas, desvirtuó el papel del rey-soldado y se consideró como un verdadero militar, apto para mandar directamente al Ejército según sus infantiles intuiciones y los consejos de sus amigos. Parecía tener más ilusión en ponerse al mando de un regimiento que en ejercer de monarca constitucional.

El rey tomó mayor protagonismo que cualquier otro monarca constitucional de Europa occidental y manejó los asuntos de Estado como si fueran propios, negándose a refrendar los decretos, posponiendo su firma o comentándolos con los palaciegos, a espaldas del gobierno. Se consideraba la principal garantía del sistema, frente a los cambiantes políticos y, aislado del país, se relacionaba únicamente con la corte y sus ayudantes militares. Su mayor preocupación se centraban en el Ejército y llegó a manifestar que, de no haber sido rey, le habría gustado ser capitán de infantería.

España se convulsionaba en una creciente tensión social. La industrialización tardía creaba un proletariado miserable en las grandes ciudades mientras los campesinos padecían todas las lacras de una economía atrasada y una absurda distribución de la tierra. En Cataluña renacía el anarquismo y los grupos burgueses, perdidos los mercados de Ultramar, intensificaban sus reivindicaciones autonomistas.

En abril de 1904, Antonio Maura, ahora convertido en político conservador, resultó ileso de un atentado sufrido en Barcelona, de manos de un joven anarquista. En la primavera de 1905, Alfonso XIII escapó inmune de otro, llevado a cabo en las calles de París, aunque pensado inicialmente para Barcelona. Fue imposible identificar a los autores materiales, aunque las sospechas apuntaron la autoría de Mateo Morral y la inspiración de Ferrer Guardia que, más tarde, se harían tristemente célebres.

Los liberales regresaron al gobierno en marzo de 1905, esta vez, presididos por Montero Ríos que, de nuevo, hizo a Weyler ministro de la Guerra. España era el país europeo con menos artillería y los nuevos cañones, que se desplegaban en Europa, nada tenían que ver con las anticuadas piezas españolas y, en este mandato, intentó remediar la deficiencia.

Los esfuerzos por modernizar los materiales dieron un fruto: una comisión de estudios seleccionó el cañón de campaña francés Schneider de 75 mm, que incorporaba los últimos avances de la técnica y se consideraba la mejor pieza del mundo. El proyecto preveía adquirir 200 cañones, con sus carros de munición, 48 carros observatorio y la patente para fabricarlo en España.

El debate en las Cortes resultó reñido. Era comprometido hablar de gastos militares cuando todavía sangraban las heridas de Ultramar. La tenacidad del ministro consiguió la aprobación del proyecto que tendría capital importancia para el Ejército. Los cañones Schneider cuya licencia de fabricación consiguió Weyler, constituyeron la artillería de campaña española durante medio siglo. Intervinieron en la guerra de Marruecos, en la civil y permanecieron en servicio hasta ser sustituidos en los años 50 y 60 por los obuses norteamericanos de 105 mm.

Después de la madrileña, la guarnición más numerosa de España era Barcelona, donde los oficiales se enfrentaban al naciente catalanismo político, sensibilizados como estaban por el separatismo cubano y filipino. Como pocos de ellos habían nacido en Cataluña, se sentían incómodos ante una lengua que les era extraña y, desde 1903, pequeños conflictos, choques entre catalanistas y lerrouxistas, y ataques de la prensa contra el Ejército contribuyeron a encrespar sus ánimos.

La idea de evitar el separatismo proporcionó un objetivo a aquellos hombres deseosos de sacudirse la humillación de 1898. Miraban con prevención el auge del catalanismo, porque eran veteranos de la guerra de Cuba y temían que los regionalistas catalanes condujeran a un nuevo conflicto de emancipación. Los burgueses integrados en la Lliga Regionalista mantenían una postura ambivalente: consideraban a los militares como los más duros representantes del centralismo pero los halagaban para que mantuvieran el orden público y contuvieran el incremento de la presión obrera. La demagogia centralista de los republicanos de Lerroux contribuía a fomentar la excitación.

En 1905, los catalanistas triunfaron en las elecciones municipales y los militares, crispados por las continuas chirigotas antimilitaristas de la prensa, estallaron ante un chiste del dibu-

jante Junceda, hijo y nieto de militares, que discurrió un chiste antimilitarista para el semanario satírico *Cu-Cut*: un teniente preguntaba por qué acudía el público al Frontón Condal y le contestaban que se celebraba el banquete de la victoria. Ante la palabra *victoria*, el militar se extrañaba: ¡Ah, vaya, serán paisanos!

A los militares, derrotados, congelados en sus carreras, pagados pésimamente y vegetando en inútiles regimientos no les quedaban otros patrimonios que el patriotismo y el orgullo. De modo que, el 25 de noviembre, unos doscientos oficiales de uniforme asaltaron el *Cu-Cut*, y luego *La Veu de Catalunya*, órgano de expresión de la Lliga Regionalista y, como ya había ocurrido en Madrid en 1895, sólo contuvo a los revoltosos la presencia del capitán general accidental, Castellví.

El malestar de los oficiales de Barcelona sólo expresaba el disgusto general del Ejército, que, en general, apoyaba el asalto. Los militares de Madrid acudieron en masa a la estación de Atocha para despedir al capitán general de Cataluña, Delgado Zulueta, a quién los acontecimientos habían sorprendido en la capital y regresaba a Barcelona sin ánimo de reprimir a los asaltantes. La excitación llegó a tal extremo que se temió que, desde Atocha, los militares se dirigieran a las Cortes y expulsaran, de ellas, a los diputados catalanistas. Sin que nadie pudiera mover un dedo para impedirlo, pues los mandos de la Guardia Civil habían adelantado que no intervendrían contra sus compañeros.

La excitación llegó a tanto que hubo militares, dispuestos a desafiar en duelo a los parlamentarios de la Lliga Catalanista. Otros propusieron el cierre de los periódicos críticos con el Ejército, la prohibición de acceso a las Cortes de los diputados regionalistas y la expulsión del Ejército de los militares opuestos a tan drásticas medidas.

Cuando llegó a Barcelona el capitán general titular, Delgado Zulueta, numerosos oficiales acudieron a recibirle a la estación. Delgado correspondió arengándoles como si el asalto a los periódicos fuese una proeza.

El capitán general de Sevilla, Luque Coca, era un general político que aprovechó la ocasión para poner en aprietos al gobierno y envió a Barcelona un telegrama de solidaridad, que se hizo público. Luque, antiguo republicano, en 1899 había propuesto a Weyler un golpe contra la monarquía. También el capitán general de Madrid los apoyó públicamente y en numerosas guarniciones se crearon comisiones de solidaridad e, incluso, se comisionó algún oficial para servir de enlace entre ellas. Inmediatamente, la prensa militar secundó a los generales.

El problema no era únicamente español. En 1870, el Ejército francés mandado por Mac Mahon, fue derrotado y hecho prisionero por los prusianos en la batalla de Sedan. La derrota militarizó la política francesa; una vez liberado, Mac Mahon dirigió sus tropas a París, donde se había proclamado la Comuna, fusiló a unas 20.000 personas y convertido en cabeza de la derecha intransigente, obtuvo la presidencia de Francia en 1873 e intentó un golpe de Estado en 1877. Entre 1886 y 1889 se desarrolló otra importante corriente golpista, encabezada por el general Georges Boulanger. El militarismo producido por la derrota de Sedan no se liquidó hasta resolverse el *affaire* Dreyfus en 1906.

El corporativismo español no era un caso aislado. En toda Europa, los ejércitos eran los últimos reductos de las formas de vida nobiliaria pero, en España, el aislamiento pseudoaristocrático escondía el dramático fracaso profesional y la miseria económica. Bajo sus

aparatosos uniformes, los oficiales escondían a funcionarios mal pagados que se autogratificaban con los ensueños de la mentalidad profesional. Caballeros pobres, dispuestos a darle lanzadas a cualquier molino.

Consideraron el chiste de Junceda una befa intolerable para quienes había tenido que combatir en Ultramar en condiciones dramáticas. Sintiendo indefensos ante los agravios, se tomaron la justicia por su mano, saltándose las leyes. Era el mismo mecanismo mental de los ataques a periódicos en 1895 y 1897.

Al día siguiente, el gobierno acordó suspender las garantías constitucionales y enviar a Barcelona a Weyler para que, tras informarse sobre el incidente, restableciera el orden y cesara a los capitanes generales de Cataluña, Madrid y Sevilla.

El general conocía la profundidad del movimiento y era gato viejo. Advirtió a sus compañeros de gobierno que la justicia militar no condenaría aquellos actos de indisciplina y que tenían las manos atadas. Estaban inermes ante el movimiento militar, si intentaban desmontarlo serían desobedecidos y, si la situación se prolongaba, el Ejército podría poner en peligro el mismo sistema político.

Con todas sus virtudes y defectos, los militares ni provocaron la guerra de Cuba ni pudieron impedir la derrota. El Ejército había cometido errores, abusos e inmoralidades, como las restantes instituciones del poder y de la oposición. Desde 1898 los pagaba con la humillación, el fracaso profesional y la frustración de las carreras personales. Era difícil pedirle que también soportara las burlas.

Weyler no compartía los métodos de los oficiales de Barcelona; pero conocía a los militares, su malestar ante el avance regionalista, y sus viejos reproches a los políticos. Estaba a favor del parlamentarismo pero sabía que, en aquella situación, nadie podía oponerse abiertamente a la indignación militar. Había pasado el tiempo de los pronunciamientos políticos, pero la presión corporativa era insostenible. Ni deseaba oponerse al Ejército ni aceptar sus presiones anticonstitucionales. Recibió en el ministerio de la Guerra la visita de una comisión militar que reclamaba su intervención. Escuchó los argumentos y respondió que, efectivamente, debían frenarse los regionalistas catalanes. Pero no pasó de ahí. Ni hizo nada concreto, salvo apoyarles verbalmente. No podía oponerse al Ejército en bloque ni tampoco darle la razón.

Los acontecimientos se precipitaron el 28 de noviembre cuando el rey tomó partido. Convocó al gobierno para comunicarle su parecer y transmitirle su opinión de defender al Ejército. El gabinete se sintió incapacitado para restaurar la disciplina y Montero Ríos dimitió.

El gobierno Montero Ríos, a fin de tranquilizar a los militares, presentó un proyecto de ley para suspender las garantías constitucionales en Barcelona, a pesar de que el conservador Maura, el tradicionalista Vázquez de Mella y el republicano Salmerón se opusieron, el temor a los militares hizo aprobar la ley por 133 votos contra 5. El esfuerzo desgastó y derribó a Montero Ríos.

El 1 de diciembre de 1905 Moret formó un nuevo gobierno liberal, donde Alfonso XIII impuso a tres ministros: el de Marina, uno de sus antiguos profesores en Instrucción Pública y en Guerra al general Luque, uno de los causantes de la crisis. Y, no satisfecho, todavía presionó para nombrar los capitanes generales que le parecieran convenientes.

Luque, apoyado por la prensa militar, presionó para transferir a la jurisdicción militar los delitos de prensa e imprenta “contra la Patria y el Ejército”. El nuevo ministro de Justicia preparó una

futura ley para permitir al Ejército juzgar las acciones que considerase lesivas contra él; Luque presionó para ampliar las competencias militares, en Alcoy los militares asaltaron otro diario, el coronel Primo de Rivera retó en duelo a un diputado que resultó herido, por haber censurado a su tío, el capitán general. Cuando se anunció una conferencia de Unamuno sobre el tema, Luque anunció que enviaría a escucharla a un auditor, dos jefes de estado mayor y dos taquígrafos.

Puestos finalmente de acuerdo el liberal Moret y el conservador Maura, ante tantas presiones, se aprobó la ley de 23 de marzo de 1906, llamada *de jurisdicciones*, por 183 votos a favor y 11 en contra. Desde entonces, los tribunales militares juzgaron las ofensas cometidas contra las fuerzas armadas o *contra la Patria*. El fiscal quedaba obligado a recurrir las sentencias absolutorias y, cuando tres o más individuos de una misma asociación eran condenados por delitos contemplados por esta ley, la asociación podía ser suspendida.

El civilismo había perdido una batalla planteada ya durante la discusión de las reformas de Cassola y el poder militar pasaba a controlar libertades esenciales del sistema liberal.

La formación del gobierno Maura de 1907, imprimió un nuevo giro a la política conservadora, que abandonó la línea regeneracionista de Silvela y Fernández Villaverde, una vez que la estabilización económica había surtido efecto y unos 5.000 oficiales de Reserva habían abandonado el Ejército. Maura creyó llegado el momento de conectar con las ambiciones imperialistas de Europa, impulsar las abandonadas relaciones internacionales y reconstruir la flota de guerra. Como el navalismo imperante, medía la potencia exterior de los Estados en acorazados y colonias, en 1909 el gobierno impulsó la creación de la Sociedad Española de Construcción Naval, filial de las empresas de armas británicas Wickers, Armtroug y Brow, que se instaló en los arsenales españoles con el encargo de construir una moderna escuadra de 3 acorazados de 15.000 tm, 3 destructores de 400 tm, 24 torpederos de 180 tm y 4 cañoneros de 800 tm, ambición que sólo se pudo llevar a cabo parcialmente al cabo de muchos años, con prórrogas sucesivas y, como la falta de recursos impuso programas de material insuficientes, la construcción de una Marina mediocre e incompleta, mantuvo al Ejército en la miseria.

Aquel mismo año, el intento de un grupo capitalista español, para poner en explotación una mina en el Rif, desembocó en un conflicto entre la guarnición de Melilla y las kabilas vecinas. Los deseos de proyección exterior del gobierno se concretaron en el envío de tropas peninsulares y, en lugar de la brigada de reserva de Andalucía, el ministro de la Guerra decidió trasladar a Melilla batallones de Madrid y Barcelona a fin de ensayar una mala imitación de la movilización prusiana, recientemente implantada en España. En consecuencia, mientras reclutas recién incorporados vegetaban en sus cuarteles, hombres de la segunda reserva que habían prestado el servicio en filas varios años antes y, en muchos casos, ya tenían familia a cargo, fueron movilizados y enviados a Marruecos. El embarque en Barcelona, enfrentó a las familias con algunos oficiales y la progresión de los incidentes provocó una revuelta que dejó la ciudad aislada desde el 26 al 31 de julio. La llamada Semana Trágica consolidó el papel del Ejército como aparato de la represión interior del Estado, las tropas restablecieron el orden y la jurisdicción militar procesó a 1.000 detenidos y ejecutó 5 fusilamientos. Para el futuro, quedó definida la alineación del cuerpo de oficiales, junto a las fuerzas conservadoras, pues el gobierno Maura se presentó como el único defensor de la paz social y de la Patria, identificando la campaña suscitada en Europa por la ejecución de Ferrer Guardia, como una acción de desprestigio contra España.

La corta campaña de Melilla reveló las deficiencias militares. Los soldados entraron en campaña con visibles uniformes blancos y azules, el rayadillo de Cuba, mientras los ingleses usaban el caqui en la India desde 1848. Los cañones Sotomayor eran antiguallas de bronce, porque las fábricas de armas españolas habían ignorado la renovación artillera desencadenada en todos los ejércitos desde 1897, gracias al cañón de acero Déport de 75 mm. Tras siglos de permanencia en Melilla no se contaba con planos de los alrededores y fue diezmada una unidad de cazadores, que se adentró imprudentemente en el Barranco del Lobo.

Cuando, finalmente, los kabileños fueron reducidos, quedó demostrado, una vez más, que el Ejército carecía de capacidad para ir más allá de las operaciones de orden público. Constituía, no obstante, una fuerza política en auge, mimada por Alfonso XIII, que parecía confiar más en los generales que en los políticos. Ante la inquietud social y las crecientes reivindicaciones obreras, muchas miradas conservadoras se volvían hacia los cuarteles, en busca de la seguridad que los sables habrían garantizado durante los gobiernos del moderantismo y la estabilidad de todo el sistema pasaba a depender de la pirámide militar, culminada por el rey. También la intransigencia de los empresarios confiaba más en la represión militar que en las negociaciones.

Sólo defendieron la intervención en Melilla los conservadores, cuyos hijos eludían el servicio, gracias a la redención a metálico. Los liberales y las fuerzas de izquierda se mostraban antibelicistas y antimilitaristas porque únicamente los pobres cumplían el servicio militar. España no estaba amenazada militarmente, sus únicos vecinos, Portugal y Francia, y las escaramuzas alrededor de Ceuta y Melilla no se debían a la presión de las kabilas sino a las interferencias de la guarnición en el territorio más allá de los límites. El Estado carecía de la posibilidad, y quizá de la necesidad de una defensa exterior, que no preocupaba ni a los políticos ni a los mismos militares, mientras el Ejército estaba marginado de la tecnología militar europea y únicamente los artilleros adquirían algunas informaciones técnicas extranjeras, destinadas a gestionar las fábricas de armas y municiones bajo su dirección.

Con menores ambiciones que en la Marina, se iniciaron algunas reformas en el Ejército, como ampliar la Policía Indígena, fundada en 1908, y sustituir los vetustos cañones de bronce, por piezas de acero de la última moda, Schneider de 75 mm, que iban a constituir durante el medio siglo siguiente, la artillería ligera de campaña española. La innovación no resolvió, sin embargo, la miseria militar; frente a las 574 baterías de Alemania o los 258 de Italia, España contó con 88, unas 60 precariamente en servicio y el resto con oficiales pero sin soldados, cañones ni ganado.

El gobierno liberal de Canalejas de 1910, decidió satisfacer la vieja aspiración de su partido, eliminando la redención a metálico. Su pretensión no se reducía a transformar el servicio militar sino también regenerar la política exterior, en particular la marroquí, pues los compromisos africanos de la Restauración se habían incumplido sistemáticamente y los franceses amenazaban con ocupar todo el territorio. Así, en 1911 incrementó la tropa indígena y, al año siguiente, comenzó la ocupación militar de la zona española del Protectorado.

La reforma Canalejas, cuyo ministro de la Guerra era el general Luque, pretendía establecer la igualdad de los ciudadanos ante el servicio militar obligatorio, entonces una reivindicación democrática como la igualdad legal, extensión del sufragio o de los impuestos. La ley de Bases del 29 de junio de 1911 y la del Servicio Militar del 12 de febrero de 1912, establecie-

ron la obligación de todos los españoles ante el servicio militar, sin posibilidad de sustituirlo con pagos en metálico en tiempo de guerra. Para tiempo de paz, la misma ley creó los soldados de cuota que prestaban un servicio de 10 ó 5 meses si pagaban al Estado 1.000 ó 2.000 pesetas, según la modalidad elegida, que, en todo caso, era excesivamente cara para las familias humildes, cuyos hijos quedaban obligados a un servicio de tres años, similar al de 1862 en Prusia y 1889 en Francia. El legislador pretendía formar con los cuotas una oficialidad de complemento, que permitiera reducir el número de tenientes profesionales y proporcionar los cuadros de mando en caso de movilización, como se había establecido en Prusia en 1862 y luego en los restantes ejércitos. Sin embargo, en España, el soldado de cuota fue un simple privilegiado que sólo sirvió para eludir parte del servicio, cuando la ley llevaba veinte años en vigor, los oficiales de complemento no llegaban a dos mil y no se había aliviado la hipertrofia del escalafón profesional.

Esta reforma no mejoró el Ejército, en cambio, la activación de las operaciones en Marruecos generó un nuevo militarismo, al reabrir las posibilidades de los ascensos por méritos de guerra, que tantos abusos habían propiciado en las guerras civiles y coloniales. Cuando Canalejas se enfrentó a una oleada de huelgas acudió a la tradición militarista española, refrescada ahora por la militarización de los trabajadores franceses dos años antes. La “ley del brazalete” puso a los ferroviarios españoles bajo la jurisdicción armada, amenazándolos con un consejo de guerra si faltaban al trabajo.

El asesinato de Canalejas en 1912 acabó con el último intento de renovación política. Desde entonces, la fragmentación de los partidos paralizó la capacidad de los gobiernos mientras España se enfrentaba a los grandes problemas del crecimiento industrial y la guerra de Marruecos. Desapareció desde 1913 el turnismo entre liberales y conservadores, desde 1916 ningún líder fue capaz de mantener la disciplina y el parlamento entró en crisis. Naturalmente, la debilidad política potenció el poder de los empleados del Estado cuyo mayor cuerpo era el Ejército y su jefe natural, Alfonso XIII, actuó más como un espadón histórico, que como el jefe del Estado. Convencido de contar con el apoyo militar, prescindió de la vida parlamentaria y rellenó los vacíos políticos con gobiernos de gestión. El sistema se convirtió en un juguete del rey, apoyado en las bayonetas.

La ocupación del Protectorado condujo al enfrentamiento con los caudillos que mantenían a las tribus bajo su dominio ocasional. Las campañas de Yebala (1913-1922) tuvieron por objeto enfrentarse al Raisuni, jefe indígena cuyo poder se extendía por las kabilas cercanas a Larache, Tánger, Tetuán y Xauen. Al considerar el de ocupación deseado, los oficiales se dividieron en dos tendencias, una partidaria de llevar a cabo una guerra sin cuartel contra los moros insumisos, que estuvo animado por el periodista Cándido Lobera de El Telegrama del Rif de Melilla, y otra que deseaba combinar la guerra, la diplomacia y los sobornos a los jefes de tribu, en la que tomaron parte oficiales experimentados en el trato con los naturales y en el servicio de la Policía Indígena o las Intervenciones como Gómez-Jordana, o Castro Girona.

El nuevo ejército colonial se núcleo en torno a los regimientos de soldados indígenas, llamados grupos de regulares. Elevados a cuatro en 1914, pasaron a ser la verdadera fuerza de choque de una guerra donde los soldados moros desempeñaban las misiones más peligrosas y sus oficiales españoles eran los más expuestos al fuego enemigo, mientras las campañas languidecían bajo una burocracia ineficaz, la falta de material y la mala planificación de los go-

biernos de Madrid, vacilantes entre el colonialismo o el abandonismo. La clase política española tenía menos claro el panorama colonial que la francesa o la británica, con mayor razón cuando la zona española de Marruecos era pobre y jamás se intentó ponerla en explotación. En un Ejército anticuado y estático, las tropas de Marruecos se convirtieron en las únicas con cierta actividad, donde los oficiales podían ascender por méritos de guerra y librarse de la pésima carrera de sus compañeros peninsulares. Pero en África, la carencia de recursos y la falta de voluntad gubernamental imponían una tediosa guerra de pequeños combates, con escasa artillería, llevados a cabo por unidades pequeñas, impulsadas más por la actitud de los oficiales que por la presión organizativa del Ejército. Esta primacía del valor personal sobre la técnica militar potenció la mística de un heroísmo primitivo sobrevalorado frente a la organización, la táctica o la topografía.

En la academia de infantería de Toledo, los profesores, que eran veteranos de la guerra de Cuba o Filipinas, daban a los jóvenes cadetes una educación espartana, alentada por su amargado entusiasmo, a fin de prepararlos para esa nueva guerra difícil y atrasada. El cuerpo de oficiales, desmoralizado por el 98, recuperó su moral en Marruecos, mientras la comparación entre el colonialismo francés y los incompetentes gobiernos españoles desprestigiaban, a sus ojos, el poder civil. La falta de respeto de los militares de Marruecos a sus gobiernos, se crispó en la defensa de los ascensos por méritos de guerra, defendidos por los oficiales de Marruecos y atacados por los oficiales destinados en la Península que, en 1912 se manifestaron ante la redacción de *La Correspondencia Militar* para protestar por las recompensas concedidas.

Aunque todos los tenientes de infantería pasaban una temporada en África, sólo algunos lograban permanecer allí largo tiempo. El estudio de la escala Activa de infantería, demuestra que, en 1912, 14 coroneles de un total de 237, 51 tenientes coroneles de 518 y 72 comandantes de 1.063 prestaban servicio en Marruecos, donde el sueldo era mayor y la vida profesional más gratificante. En el grupo de los llamados africanistas, sólo lograban integrarse los designados por los altos mandos del territorio, que tenían facultad para elegir libremente a sus subordinados. En consecuencia, se configuró un grupo cerrado de oficiales vinculados a la vida colonial, soportando sus dificultades y riesgos, pero beneficiándose de sus prebendas y ascensos por méritos de guerra, mientras sus compañeros de la Península intrigaban en la burocracia de Madrid o vegetaban en la tediosa vida de guarnición, frustrados por los malos sueldos y los escalafones congelados.

Marruecos formó una nueva mentalidad militar, sobre todo en la infantería, que era el cuerpo más numeroso. Los oficiales se sentían cómodos en aquel Protectorado organizado como un gran campamento, sin oposición política ni opinión civil, con la máxima autoridad administrativa, el alto comisario, siempre en manos de un general, y se sentían traicionados cuando, al otro lado del Estrecho, crecía la oposición a la guerra y al servicio militar en África. En cambio, sus compañeros de la Península estaban irritados con su mala carrera y, en 1914, cuando el ministerio de la Guerra estableció que los comandantes y tenientes coroneles debían someterse a pruebas de aptitud antes de ascender por antigüedad, se desató un viento de fronda que obligó a dejar la medida para más adelante.

No se había recuperado la incidencia del 98 en el Ejército, cuya crisis ahora se revelaba con toda su crudeza. El intento canovista de someter a los militares al poder político también se había perdido en Cuba.